



RESUMEN Y PROSPECTIVA

- El 15 de junio la jueza de Control del distrito judicial local XVIII de Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional y agentes de investigación de la FGE-Veracruz, acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Dadas las circunstancias de su detención y las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García acerca del caso, es probable que su detención sea una represalia por su trabajo jurisdiccional. De confirmarse esta posibilidad, ésta constituiría un importante precedente negativo en relación con la imparcialidad jurisdiccional, y podría llevar a jueces veracruzanos a obstruir la resolución de casos al percibir el riesgo de que también ellos podrían ser objeto de este tipo de represalias.
- Lantia Intelligence identifica que la presencia de grupos criminales, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, Los Salazar o Los Cuinis, implica un mayor nivel de víctimas ocultas en fosas clandestinas en comparación con aquellos municipios donde estas organizaciones no tienen presencia. Identificamos al menos una víctima oculta en fosas clandestinas en 215 municipios del país y determinamos (con un nivel de confianza del 95%) que la presencia de cinco grupos implica un mayor número de víctimas ocultas: Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, y Los Salazar.
- Este miércoles 14 fue asesinado un miembro de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que se dedicaba a proteger a integrantes del grupo Madres Buscadoras de Sonora en Huatabampo, municipio al sur de la entidad. Se trató de un ataque perpetrado por una agrupación del crimen organizado para mandar el mensaje de que el territorio registrado por las buscadoras está bajo su control. Estimamos que se trató de la célula delictiva La Plaza, vinculada al Cártel de Caborca, dedicada a combatir facciones de los llamados Chapitos en esta región para ganar la ruta del transporte de droga. Este asesinato se incrusta en una dinámica de violencia en contra de colectivos de búsqueda de desaparecidos, donde destaca el reciente secuestro de Cecilia Flores, lideresa de la organización Madres Buscadoras de Sonora en abril pasado. En esta línea, las rivalidades criminales y la disputa por las rutas de la droga mantendrán en alto riesgo a estos grupos que despliegan sus búsquedas en zonas fuertemente controladas por el crimen organizado.

- La regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denisse Ahumada Martínez, fue detenida el pasado 10 de junio en Falfurrias, Texas, por contrabando de 42 kg. de cocaína. La regidora confesó a los agentes su intención de transportar los narcóticos hasta San Antonio, Texas e, inclusive, que no era la primera vez que realizaba dicha actividad. Sin embargo, el juez federal a cargo del proceso, Juan F. Alanís, desestimó el caso el pasado 15 de junio, porque la fiscalía de Estados Unidos no logró presentar el estándar de causa probable, condición necesaria en el derecho estadounidense para sustentar el delito.
- Desde el mes pasado, el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, ubicado en la región fronteriza entre México y Guatemala, se ha visto inmerso en una ola de violencia por las pugnas entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por controlar la zona. Hasta el momento se contabilizan al menos 60 muertos y decenas de jóvenes desaparecidos que fueron reclutados a la fuerza por dichos grupos criminales. Cada vez es más visible la expansión del CJNG hacia el territorio guatemalteco a través de alianzas con grupos criminales, y por medio de la cooptación de elementos de seguridad, lo que fortalece sus actividades de tráfico de drogas, armas y migrantes en la zona.
- En mayo pasado comenzaron protestas de productores de maíz y trigo en Sinaloa, que fueron secundadas en al menos seis entidades más, exigiendo que se incrementaran los precios de garantía de sus productos para el actual ciclo agrícola (donde el precio del maíz es más bajo que el año anterior). Tomaron las instalaciones de Pemex en Topolobampo, Culiacán y Guamúchil, y esta semana cerraron el aeropuerto de Culiacán. Resaltan en el transcurso de este evento, las declaraciones del gobernador de Sinaloa, quien para retirar al contingente que tomó el aeropuerto ofreció encabezar protestas contra las empresas que compran estos insumos. Aun cuando el presidente López Obrador señaló que no cederían ante chantajes, al día siguiente se realizó una mesa de trabajo para que los manifestantes liberaran el aeropuerto. No se conoce aún el detalle de los acuerdos relacionados con este subsidio (salvo que se comprarán 500 mil toneladas más con precios de garantía). Sin embargo, resulta claro que al final del sexenio habrá mayor vulnerabilidad del gobierno para enfrentar este tipo de protestas, especialmente cuando las políticas de subsidios no son transparentes e introducen distorsiones económicas donde las empresas privadas no están dispuestas a asumir pérdidas.
- El pasado 12 de junio la policía municipal de Tijuana, Baja California, encontró siete cadáveres aun no identificados en una camioneta abandonada. Este incidente ocurrió en un contexto de disputas entre organizaciones criminales (principalmente entre las células del Cártel de Sinaloa, Los Zambada y Los Guzmán) y uno de los resultados más importantes ha sido la proliferación de amenazas dirigidas a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; y el exgobernador Jaime Bonilla. Se espera que el aumento de jornadas violentas continúe y exija mayor atención de las autoridades, que han sido muy cuestionadas (en especial la alcaldesa) por no ser capaces de enfrentar estas olas de violencia.

ANÁLISIS



Detención de jueza veracruzana sienta un precedente negativo para la actividad jurisdiccional en ese estado; contribuye al descrédito de las instituciones de justicia y sus titulares

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

El 15 de junio, la jueza de Control del distrito judicial local XVIII de Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional y agentes de investigación de la FGE-Veracruz acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Dadas las circunstancias de su detención y las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García acerca del caso, es probable que su detención sea una represalia por su trabajo jurisdiccional. De confirmarse esta posibilidad, ésta constituiría un importante precedente negativo en relación con la imparcialidad jurisdiccional, y podría llevar a jueces veracruzanos a obstruir la resolución de casos que son de su conocimiento, al percibir el riesgo de que también ellos sean objeto de este tipo de represalias.

La juez de Control fue acusada por autoridades veracruzanas de ordenar la liberación de Itiel Palacios García (a) “El Compa Playa”, presunto líder criminal acusado por la FGE-Veracruz del homicidio de tres personas y, en específico, el de Juan Carlos Molina Palacios, exdiputado local por el PRI y líder regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) el 9 de noviembre de 2019 en Medellín de Bravo, Veracruz.

- Itiel Palacios García fue detenido el 3 de septiembre de 2020 en León, Guanajuato. Tras 11 meses de prisión (el 25 de agosto de 2021), un juez de Control del Distrito Judicial XVII emitió un auto de no vinculación a proceso por sentencia de amparo (un Juzgado Federal identificó vicios graves en la investigación y ordenó la reposición del juicio). Sin embargo, agentes de la FGE-Veracruz lo esperaban fuera del penal y lo detuvieron de nuevo acusado de dos homicidios adicionales —los de Leonardo Hernández (a) “El Brujo” y Eneas Pérez Ramírez del 27 de abril de 2018 en Playa Vicente— y fue puesto a disposición de un juez de Control, pero ahora adscrito al Distrito Judicial XVIII. Cabe mencionar que, tras esa primera liberación, el gobernador Cuitláhuac García acusó al juez que resolvió el asunto de haber recibido un soborno de tres millones de pesos.
- A diferencia de otros detenidos por ser líderes criminales o por la comisión de delitos de alto impacto, Itiel Palacios García recibió apoyo de organizaciones civiles; las que señalaron que él fue erróneamente identificado como responsable del homicidio. Además, en diversas conferencias de prensa, sus defensores aseguraron que fue detenido sin elementos probatorios suficientes que lo vincularan con el homicidio e, inclusive, aseguraron que múltiples elementos de prueba en la carpeta de investigación fueron fabricados.

- La jueza Angélica Sánchez Hernández resolvió el sábado 3 de junio un auto de no vinculación a proceso de Itiel Palacios García. Esta decisión fue resultado de una sentencia de amparo en la que se le ordenaba reponer el juicio al existir errores graves en la carpeta de investigación. De acuerdo con declaraciones de la jueza, las fallas en la carpeta de investigación eran de tal gravedad, que no era posible sostener siquiera que el caso de Juan Carlos Molina Palacios fuera un asesinato (en ésta no obraba la necropsia del cuerpo y, sin ella, es imposible determinarlo).

Tras emitir el auto de no vinculación a proceso de Itiel Palacios, autoridades veracruzanas comenzaron la persecución de la jueza.

- El martes 5 de junio, después de emitir el auto de no vinculación a proceso de Itiel Palacios García, elementos de la SSP-Veracruz la detuvieron al salir de su domicilio. De acuerdo con la jueza, los policías le sembraron armas y droga e, inclusive, la obligaron a disparar un arma con la intención de que posteriormente se efectuara una prueba que confirmara que ella utilizó armas (prueba de rodizonato de sodio). Además, la jueza aseguró que los policías la torturaron e intimidaron. En esa primera detención se le acusó de agredir a elementos de la SSP-Veracruz. Durante dos días, la jueza estuvo detenida en Veracruz, pero fue liberada con apoyo del Instituto Federal de la Defensoría Pública el 7 de junio.
- Tras salir de prisión, la jueza viajó a la Ciudad de México para solicitar apoyo del senador Ricardo Monreal y de la ministra Norma Piña. Sin embargo, la jueza sólo logró tener la reunión con el senador, pero fue detenida antes de su reunión con la ministra por elementos de la Guardia Nacional y autoridades veracruzanas. Destaca que, en esta segunda detención, a pesar de encontrarse ella fuera de Veracruz, autoridades veracruzanas no solicitaron apoyo de la FGR o de la FGJ-CDMX. Sólo después de que fuera detenida por la GN, ella fue trasladada a la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México para que su detención fuera certificada.
- Un juez de Control de Veracruz impuso un año de prisión preventiva justificada a la jueza. Es probable que la imposición de esta medida cautelar tuviera relación con los dichos del gobernador, que señalaban que ella intentó evadirse de la justicia al viajar a la Ciudad de México (aunque se sabía de antemano que tendría reuniones para solicitar apoyo a su caso).

Es altamente probable que en el caso de la jueza detenida se acrediten violaciones graves a los derechos humanos por la actuación ilegal de autoridades veracruzanas, de la Guardia Nacional y de la FGE-Veracruz. Sin embargo, las investigaciones por este caso probablemente no se resuelvan en la CNDH (no ha existido interés por parte de esta institución por perseguir este tipo de asuntos), sino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —a la que ya se presentó una queja por persecución judicial. Por otra parte, es probable que la jueza permanezca en prisión durante los próximos meses; en lo que se resuelven impugna-

ciones que haga su defensa a la medida cautelar y, en general, al proceso que se sigue en su contra.

Por otra parte, dadas las irregularidades en el proceso penal en contra de Itiel Palacios García, es altamente probable que él sea inocente. Inclusive, aún en el caso de que él efectivamente sea la persona con el alias “El Compa Playa”, las deficiencias graves en la carpeta de investigación no podrían ser válidas en juicio y será absuelto (a menos de que, como en este caso, se presione a jueces para fallar en su contra). Sin embargo, llama la atención el fuerte interés de parte de autoridades veracruzanas por condenarlo por cualquiera de los delitos que se le imputan.

- Medios de comunicación veracruzanos publicaron diversas críticas sobre la aparente apatía del Ministerio Público veracruzano por efectuar una investigación a fondo del homicidio del exdiputado. Algunos de éstos consideraron probable que la intención de las autoridades sea culpar falsamente a Itiel Palacios García, y que el verdadero responsable tenga cercanía con el partido en el gobierno.
- Este caso generará un fuerte desgaste en la credibilidad de las autoridades veracruzanas y pone en entredicho la imparcialidad de la FGE-Veracruz, de la SSP y del propio gobernador.



El número de víctimas ocultas en fosas clandestinas aumenta con la presencia, a nivel municipal de grupos criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, Los Salazar y Los Cuinís

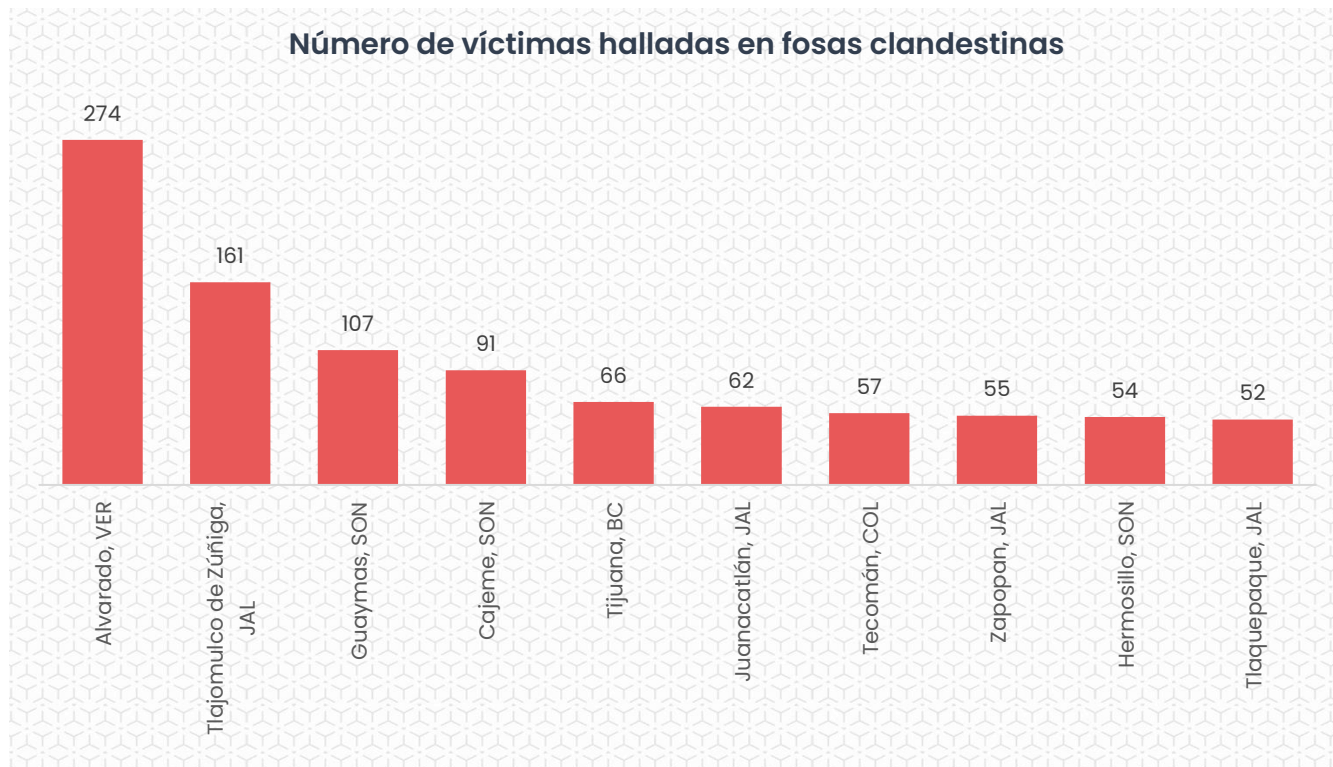
ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

Lantia Intelligence realiza un análisis de estadística inferencial sobre la relación que existe entre el número de víctimas halladas en fosas clandestinas descubiertas en los últimos dos años (2021 y 2022) a nivel municipal, y las 20 organizaciones con mayor presencia a lo largo del país. Los principales hallazgos son los siguientes:

- Se descubrieron un total de 2,257 víctimas que se encontraban ocultas en fosas clandestinas. Se identificó al menos una víctima en 215 municipios del país. El 43.4% de los hallazgos se concentra en diez municipios: Tijuana (Baja California); Tecomán (Colima); Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, Zapopan, y Tlaquepaque (Jalisco); Cajeme, Guaymas y Hermosillo (Sonora); y Alvarado (Veracruz).
- Es posible determinar, con significancia estadística, que la presencia de cinco organizaciones criminales implica un mayor número de víctimas ocultas en fosas clandestinas, en los municipios en los que fueron halladas en comparación con aquellos municipios

donde no se encuentran. Dichas organizaciones son el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Cuinis, y Los Salazar.

- Sobresalen los siguientes municipios con los más altos coeficientes de incidencia:



- Los Salazar (grupo subordinado al Cártel de Sinaloa), tienen presencia en 29 municipios, en los cuales se han hallado 383 víctimas en fosas clandestinas, es decir, un promedio de 13.2 víctimas por municipio.
- Los Cuinis (grupo subordinado al CJNG) han estado activos en siete municipios, donde se han descubierto fosas clandestinas con los restos de 89 víctimas, lo que implica un promedio de 12.7 víctimas por municipio.
- El Cártel de Santa Rosa de Lima, con presencia en 25 municipios, en los cuales hemos registrado el hallazgo de 174 víctimas en fosas, es decir, 6.0 víctimas en promedio por municipio.
- Por otra parte, en los 97 municipios con presencia del Cártel de Sinaloa se han descubierto los restos de 433 víctimas ocultas, lo que implica un promedio de 4.5 víctimas por municipio. En tanto que en los 351 municipios con presencia del CJNG se han hallado 1,079 víctimas en fosas clandestinas (3.1 víctimas por municipio en promedio).

20 Organizaciones Criminales con Mayor Presencia en el País

Organización Criminal	Número de Municipios con Presencia	Número Víctimas Ocultas en Fosas Clandestinas en Municipios con Presencia	Promedio Víctimas Ocultas en Fosas Clandestinas por Municipio	Relación Positiva y Estadísticamente Significativa*
Cártel de Santa Rosa de Lima	29	174	6.0	Sí
Cártel de Sinaloa	97	433	4.5	Sí
Cártel de Tepalcatepec	33	46	1.4	
Cártel del Noreste	35	50	1.4	
Cártel del Sur	27	74	2.7	
Cártel Jalisco Nueva Generación	351	1079	3.1	Sí
Cárteles Unidos	50	37	0.7	
Guardia Michoacana	31	35	1.1	
Guerreros Unidos	37	53	1.4	
La Línea	29	78	2.7	
La Nueva Empresa	106	63	0.6	
La Nueva Familia Michoacana	56	87	1.6	
La Unión Tepito	25	7	0.3	
Los Cuinis	7	89	12.7	Sí
Los Maldonado	25	3	0.1	
Los Metros	33	44	1.3	
Los Rojos	48	61	1.3	
Los Salazar	29	383	13.2	Sí
Los Viagra	72	103	1.4	
Los Zetas Vieja Escuela	83	74	0.9	

Nota (*): Se emplea Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, nivel de confianza de los coeficientes es de por lo menos el 95%.



Célula delictiva de La Plaza continúa ejerciendo violencia contra el colectivo Madres Buscadoras de Sonora

RIESGO DE SEGURIDAD

Con el asesinato de Octavio Ayala Lugo, oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), grupos criminales cumplen sus amenazas contra el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. Por la mañana del pasado miércoles 14 de junio, un sicario acribilló al oficial cuando éste se disponía a abordar su vehículo. Tras el suceso, el gobernador Alfonso Durazo planteó en conferencia de prensa que la agresión armada estaba ligada a organizaciones criminales. En efecto, el fin de semana pasado, este oficial brindó tareas de protección a un grupo de buscadoras en el municipio de Huatabampo. Derivado de ello, medios locales informaron que en esta búsqueda se encontraron con una casa de seguridad presuntamente del crimen organizado, de modo que este asesinato es tanto una represalia por visibilizar públicamente una casa de seguridad como una amenaza directa en contra del colectivo y sus labores de búsqueda en esa región.

Cabe destacar que, comúnmente, los lugares en que se sospecha la presencia de fosas comunes y quemadores suelen estar controlados por el crimen organizado. Por esta razón, resulta necesario que en algunas ocasiones estos grupos de buscadoras entren en contacto con liderazgos criminales locales para pedir el permiso de incursionar en ciertos territorios. Este es el caso del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, liderado por Cecilia Flores. El 25 de mayo pasado, esta organización dirigió una carta a los cárteles locales (CJNG, Los Salazar y el Cártel de Sinaloa) para pedir el rescate de una madre secuestrada, Yesenia Guadalupe Durazo Cota. Igualmente, Cecilia Flores fue retenida en abril durante 19 horas en el desierto sonorense por elementos del crimen organizado. De esta manera, hay señales para prever que la labor de estos colectivos continuará siendo de alto riesgo dada la dinámica de control territorial que procuran las distintas bandas de la región.

En particular, el asesinato del oficial de la AMIC podría adjudicarse al grupo criminal La Plaza, vinculado al Cártel de Caborca, dedicado al combate de facciones de los Chapitos en esta región, para hacerse de la ruta del transporte de droga. El Cártel de Caborca tiende a no generar problemas en su operación de distribución y transporte de drogas a lo largo de la entidad, pero en meses recientes se registra el empleo de la célula delictiva de La Plaza para el combate directo con otros grupos criminales. La Plaza es una agrupación comandada por Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino”, quien también tiene antecedentes delictivos en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

- La tasa de víctimas letales por crimen organizado se mantiene en máximos históricos en Sonora debido a la guerra que La Plaza mantiene con facciones armadas de los Chapitos y los Salazar, sobre todo en municipios de Guaymas y Cajeme. Según datos de Lantia Intelligence, desde el primer trimestre de 2021 el número de víctimas letales del crimen organizado no desciende de 100 al mes, situación que posiciona a

Sonora como uno de los estados más violentos del país. La guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa y La Plaza se deriva de la disputa por la ruta terrestre que inicia en Guasave, Sinaloa, pasa por zonas como Guaymas y Hermosillo para llegar al municipio de Santa Ana. El Cártel de Sinaloa ejerce altos niveles de violencia para mantener la operación de esta ruta con el fin de transportar grandes cantidades de fentanilo. Por su lado, los de Caborca mantienen una distribución de drogas sintéticas al mismo tiempo que aprovechan una base de apoyo social consolidada a nivel local para preservar su presencia territorial.

Finalmente, en el sur de Sonora también se registra un riesgo de violencia en contra de comunidades Yaquis. El 13 de junio pasado, una célula armada del crimen organizado generó incendios y balaceras en las comunidades yaquis de Vícam y Pótam. Estos eventos contra estas comunidades han aumentado en semanas recientes a la par que la presencia criminal de un grupo conocido como La Chapiza Salazar. Debido a la expansión territorial que el Cártel de Sinaloa ejerce en el sur de Sonora, es posible que se registren nuevos eventos de violencia y asesinatos de alto impacto en el mediano plazo.

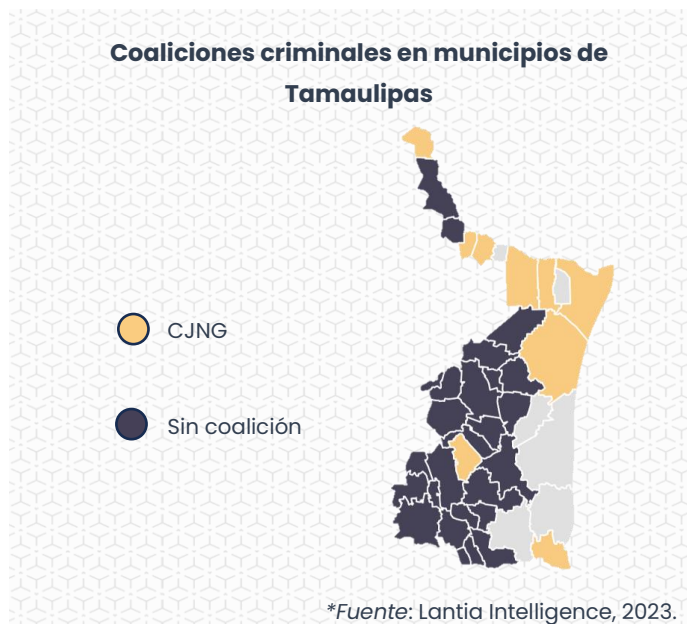


Regidora de Reynosa es detenida y luego absuelta por juez en Estados Unidos después de contrabandear cocaína en la frontera

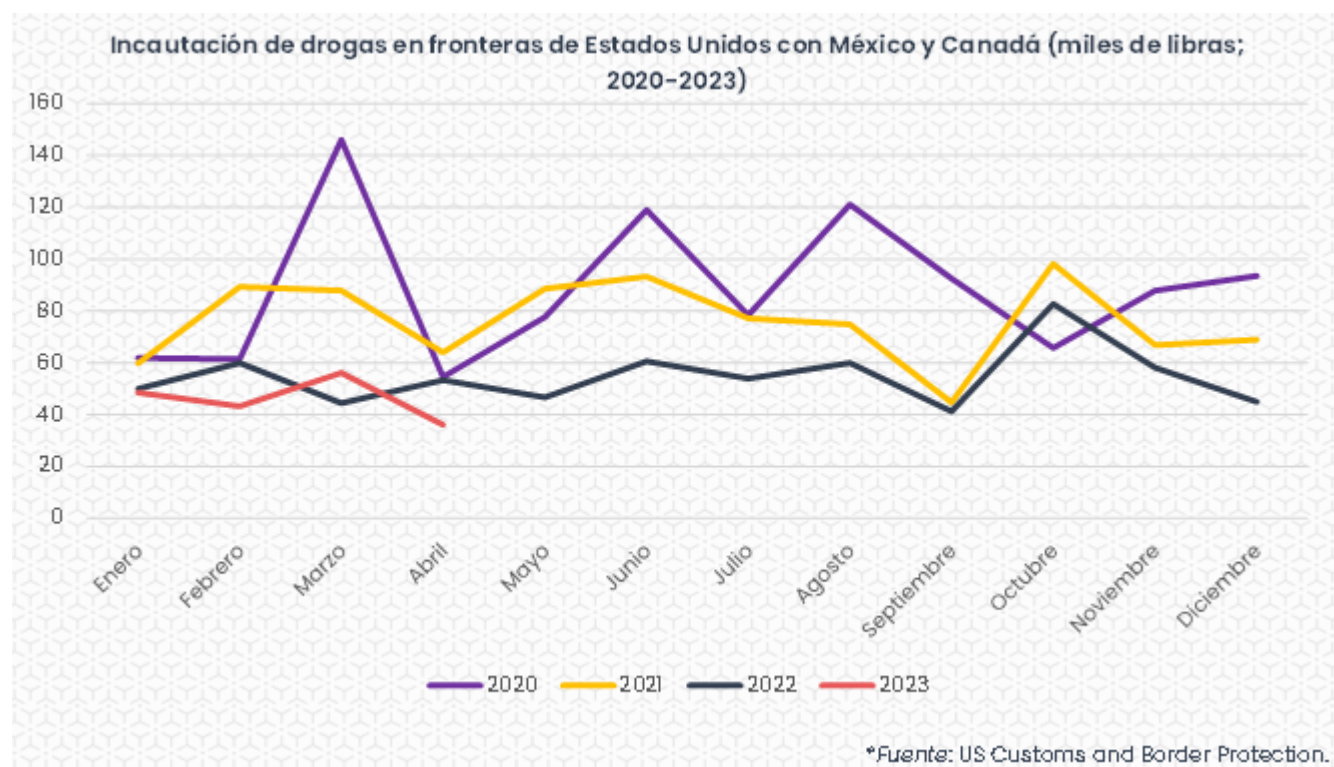
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

La regidora de Reynosa, Tamps., Denisse Ahumada Martínez, fue detenida el pasado 10 de junio en Falfurrias, Texas, cuando intentó contrabandear por la frontera 42 kilos de cocaína. Las autoridades fronterizas detectaron que en su vehículo estaban escondidos varios paquetes envueltos en aluminio y, al comprobar que estos contenían cocaína, los agentes de la DEA detuvieron a la política mexicana. La regidora confesó a los agentes su intención de transportar los narcóticos hasta San Antonio; incluso declaró que no era la primera vez que realizaba dicha actividad. A Denisse Ahumada se le negó la posibilidad de pagar su fianza, por lo que fue detenida un par de días. Sin embargo, el juez federal a cargo del proceso, Juan F. Alanís, desestimó el caso el pasado 15 de junio, porque la fiscalía de Estados Unidos no logró presentar el estándar de causa probable, condición necesaria en el derecho estadounidense para sustentar el delito.

Hasta ahora no hay indicios sobre alguna causa extrajudicial que haya influido en el

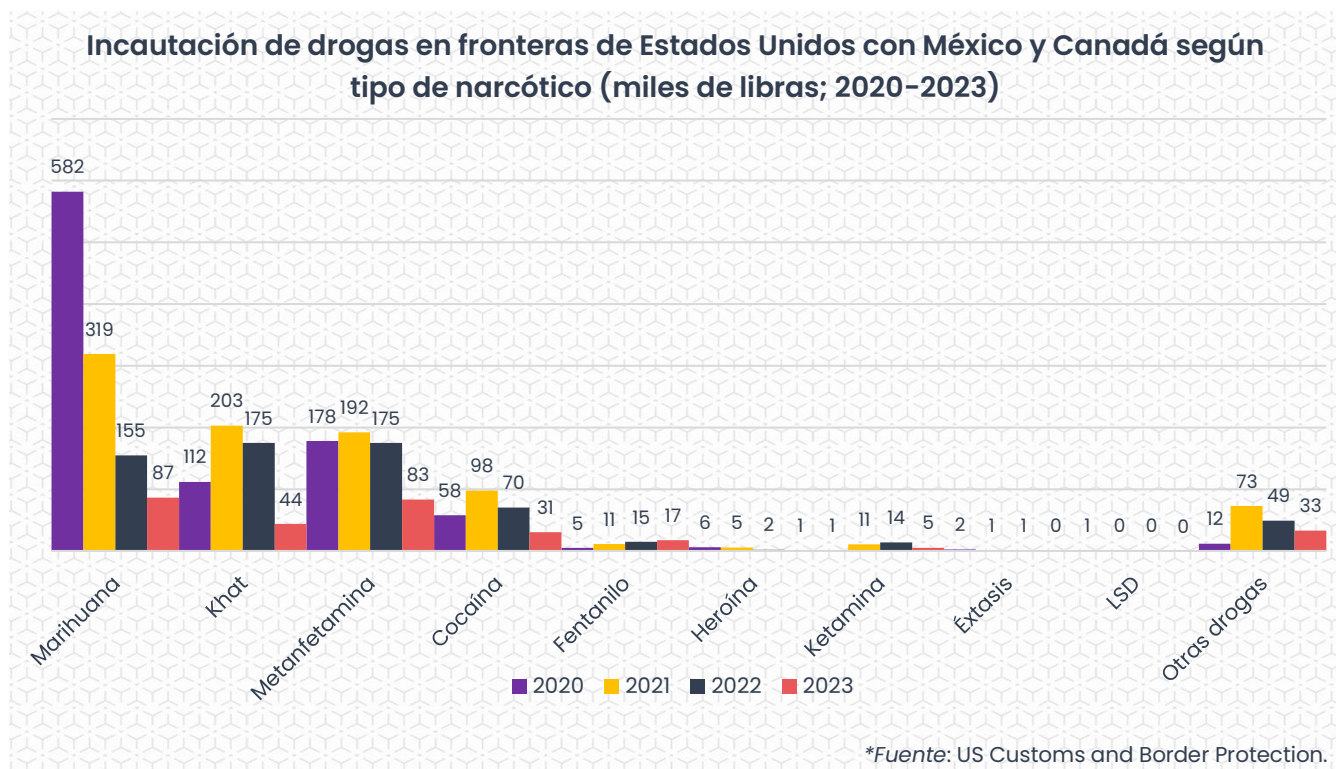


desenlace del proceso. En el ámbito de la relación entre Estados Unidos y México la detención de políticos mexicanos por autoridades extranjeras es un tema delicado para el Gobierno de México. La detención del ex secretario de Defensa Salvador Cienfuegos en octubre de 2020, por ejemplo, concluyó con el retiro de los cargos por parte del Departamento de Justicia y la repatriación del general luego de la fuerte presión política ejercida por el gobierno del presidente López Obrador. En el caso de la regidora parece más una intervención de los propios grupos criminales que la protegen, y de un tema de las jurisdicciones del sistema de justicia norteamericano. Sin embargo, habrá que esperar sobre todo las revisiones que de este caso hagan las autoridades norteamericanas. En México el caso ha servido más para politizar el origen partidista de la regidora e indagar en sus antecedentes y posibles vínculos con el crimen organizado.



Lantia Intelligence registra en la actualidad 13 organizaciones criminales con presencia en Tamaulipas. Mientras que en el centro y suroeste del estado hay organizaciones como Los Zetas Vieja Escuela, el Cártel de Noreste o la Columna Armada Pedro Méndez, en el norte del estado —particularmente en Reynosa— el CJNG es un actor importante gracias a su alianza con la mafia de Los Metros. Por su proximidad a Estados Unidos, estos grupos se benefician del tráfico transfronterizo de narcóticos. La regidora de Reynosa no declaró sobre si algún grupo criminal le proporcionó la mercancía. Sin embargo, es posible que Ahumada hubiese encontrado beneficios económicos en el trato con alguna de las organizaciones criminales con presencia en el norte de Tamaulipas.

Sólo este año se han incautado cerca de 300 mil libras de droga en la frontera, de las cuales cerca del 10% ha sido cocaína. En los últimos cuatro años, el control fronterizo estadounidense ha incautado 256 mil libras de este narcótico. Aunque la tendencia de decomisos ha disminuido respecto a años anteriores, es difícil inferir si esto se debe a una reducción general de la exportación de narcóticos a Estados Unidos, o a que las organizaciones criminales han desarrollado mecanismos más sofisticados para contrabandear drogas, escapando del control de las autoridades fronterizas.



La expansión del CJNG hacia Guatemala, a través de alianzas con grupos criminales locales, representa un peligro para migrantes y habitantes de la frontera sur

DINÁMICA CRIMINAL

Se ha detectado un incremento de la violencia en el último mes en los enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa (CDS), en la zona de Frontera Comalapa, Chiapas. El saldo hasta el momento no se ha oficializado, pero de acuerdo a testimonios de

organizaciones civiles y de los mismos habitantes de la región, podría ser de más de 60 muertos, el desplazamiento de más de 3 mil pobladores y casi 100 desaparecidos posiblemente para ser reclutados por ambos grupos criminales. El 29 de mayo, el gobierno mexicano desplegó a más de mil elementos del ejército y la policía para asegurar la zona, sin embargo, las amenazas continúan, no solamente para los pobladores, sino para los migrantes que diariamente utilizan este punto como entrada a nuestro territorio.

- La pugna entre los carteles por controlar Frontera Comalapa no sólo ha traído la violencia derivada de los enfrentamientos, sino otras consecuencias para los pobladores, por ejemplo, en la zona opera un gobierno elegido por un Concejo Municipal nombrado por el Congreso local, pero a causa de la inseguridad no hubo elecciones en los dos años anteriores.
- El CJNG, a través del grupo El Maíz, cobra derecho de piso a comerciantes, productores y transportistas y obliga a los ciudadanos a bloquear los puntos de entrada a comunidades y enfrentar a cualquier grupo que intente entrar para afectar sus intereses, incluso si se trata de elementos de seguridad pública.

Este municipio también se ha convertido en un punto importante para el tránsito de migrantes, por su cercanía con la frontera guatemalteca y porque otras rutas de acceso al territorio mexicano, como la de Tapachula, resultan más complicadas de atravesar al contar con una mayor vigilancia por parte de autoridades migratorias mexicanas.



Sin embargo, esta poca o nula vigilancia representa un peligro para los migrantes que atraviesan la zona buscando una ruta para llegar a la frontera norte del país, pues no sólo se exponen a la extorsión de los mismos policías estatales y municipales, sino que se arriesgan a ser víctimas del negocio de tráfico de personas y secuestro por parte de grupos criminales.

- El municipio de Frontera Comalapa se encuentra en un punto geográfico estratégico para el trasiego de drogas, armas y personas que llegan de Sudamérica a través de Guatemala, que además cuenta con diferentes vías aéreas, terrestres, pluviales, marítimas y férreas para transitar hacia la frontera norte del país. Por su parte, integrantes del CDS, emplazados al norte y zonas montañosas del municipio, usan este punto para transbordar cargamentos de cocaína. Entretanto, el CJNG, ubicado en la cabecera municipal y la zona fronteriza con Guatemala, ha traspasado la frontera y trabaja en alianza con grupos criminales guatemaltecos como el de Los Huistas.
- El Cartel de Los Huistas es encabezado por Eugenio Darío Molina López quien comanda desde la región de Huehuetenango, Guatemala, y a quien las autoridades estadounidenses han identificado como proveedor de drogas ilícitas a carteles mexicanos. Anteriormente sólo servía al Cártel de Sinaloa, pero en los últimos años mantiene negocios con el CJNG. También es productor de heroína y metanfetaminas. Sus bodegas, principalmente de cocaína, se ubican en las poblaciones guatemaltecas de Huehuetenango, Santa Ana Huista, San Pedro Necta y Nentón. Cabe destacar que se mantiene fuerte no sólo por su organización interna sino por sus nexos con la policía local, la fiscalía, así como con miembros del Congreso guatemalteco.

El recrudecimiento de los enfrentamientos en Frontera Comalapa fue una consecuencia del avance de integrantes del CDS hacia la zona ocupada por el CJNG para recuperar el territorio perdido, así como por el estrechamiento de la alianza de este último con Los Huistas. La zona de control y las bodegas del cartel guatemalteco están ubicadas en la frontera con Chiapas, por lo que para ambos grupos resulta prescindible mantener lazos cercanos con Los Huistas y evitar que sigan conservando nexos con el grupo contrario.

Hasta el momento, es el CJNG quien está consolidando su entrada a Guatemala a través de su alianza con Los Huistas, y de la cooperación que ha logrado con oficiales del ejército guatemalteco desde 2017 para traficar cocaína por esta zona.

Destaca el caso del coronel guatemalteco Otto Fernando Godoy Córdón, quien fuera capturado en Poptún, Petén, en febrero de 2018, y recapturado en 2022 para ser extraditado a Estados Unidos, después de la aprehensión y consecuentes declaraciones de Manuel Agustín Rodríguez Serna (a) El Manny, enlace del CJNG en Colombia. Ante la captura de Godoy en 2018, el gobierno de Guatemala relevó a 187 oficiales de alto y mediano rango en las zonas fronterizas donde operan los narcotraficantes, sin embargo, en diciembre de 2021, al menos otros tres militares guatemaltecos fueron capturados por estar vinculados al CJNG.

El incremento del vínculo entre elementos de la milicia guatemalteca y el narcotráfico responde al menos a tres factores: a) el aumento de las operaciones del narco en ese país; b) las ganancias que genera el negocio del narcotráfico, y c) el debilitamiento de la supervisión en la armada guatemalteca. En consecuencia, es poco probable que la cooptación de militares en Guatemala pueda terminarse en el corto y mediano plazo.

La estrategia de expansión del CJNG en Guatemala se basa en alianzas con grupos criminales de aquel país, así como buscar asociarse con elementos del ejército guatemalteco. Destaca que el CJNG haya incursionado de esta manera y no violentamente, lo que podría significar que no pretende iniciar nuevas disputas porque ya enfrenta suficientes en México y su prioridad es abrirse a nuevas estrategias de cooptación.



Protestas de productores de granos básicos de Sinaloa por las políticas de subsidios del gobierno federal, contribuyen a generar un clima de incertidumbre hacia el final del sexenio

RIESGO SOCIAL

- Durante el mes de mayo productores y campesinos tomaron durante cinco días (del 8 al 13 de mayo) las instalaciones de Pemex en Topolobampo, Guamúchil y Culiacán como una medida de presión para obtener un mayor precio para el maíz y el trigo del ciclo agrícola 2023. Estas acciones generaron desabasto de gasolina y compras de pánico en la región norte del estado.
- El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Marte Vega Román, señaló que los cinco mil 100 pesos que el gobierno paga por tonelada de maíz blanco no cubren los siete mil pesos que cuesta producirlo, asimismo, solicitan un precio de garantía de ocho mil pesos por tonelada de trigo.
- La protesta de los agricultores comenzó con el anuncio del gobierno federal de que solamente se comprarían 1.8 millones de toneladas de grano de maíz y trigo durante esta temporada a precio de garantía, cuando la producción total estimada de Sinaloa será de entre cinco y seis millones de toneladas. Los productores anunciaron que pondrían una pausa en la toma de las instalaciones de PEMEX, en atención al ofrecimiento del gobierno del estado para acudir a una mesa de trabajo en la Ciudad de México con la Secretaría de Gobernación.
- Esta reunión se realizó el viernes 19 de mayo una vez liberadas las instalaciones de Pemex, y asistieron el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (CAADES), Marte Nicolás Vega Román; el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía; el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas; el presidente de Productores Independientes de Sinaloa, Gumaro

López; y el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda. Ahí se expuso a Adán Augusto López un esquema para garantizar precios justos para maíz y trigo en Sinaloa; y una solicitud para desistir de cualquier represalia contra los productores por la toma de las plantas de Pemex. Sin embargo, no hubo acuerdos sobre precios ni volúmenes de producción que recibirían el beneficio del subsidio.

- Pasadas dos semanas, los productores señalaron la urgencia de realizar una segunda reunión en Ciudad de México, ante el avance de la trilla de maíz y trigo que se tiene, y definir la programación para el resguardo del maíz en bodegas de Segalmex.

Toma del Aeropuerto de Culiacán

- Ante la falta de respuesta después de la reunión con la Secretaría de Gobernación, los productores tomaron el aeropuerto de Culiacán desde la tarde del martes 13 hasta el jueves 15 de junio. La toma se concretó cuando los inconformes marcharon a pie y en vehículos civiles hasta el interior del aeropuerto, donde formaron una cadena humana para impedir el ingreso de personas.
- En un comunicado el gobierno del estado informó que las demandas de los agricultores consisten en: el pago total de la producción de 4 millones de toneladas de maíz que están fuera del programa de Segalmex y del gobierno del estado al precio de garantía de 7 mil pesos por tonelada; reabrir el sistema de Segalmex para los productores que quedaron fuera del pre registro por pagos extemporáneos; pagar la producción acopiada en las bodegas de manera masiva a la brevedad posible; movilizar la producción de las bodegas para permitir el acceso de la cosecha de maíz restante; y una reunión con el Gobernador Rubén Rocha para seguir las gestiones de las demandas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.
- En el marco de la toma del aeropuerto, el gobernador del estado instó a los productores a que mejor tomen las bodegas de las grandes empresas como Gruma, Cargil y Minsa, e incluso las culpó de estar detrás de la toma del aeropuerto y a reducir su voracidad mejorando los precios que ofrecen a los productores. Este discurso tan radical no visto hasta hoy en un gobernador, ha desatado una serie de opiniones críticas tanto del sector empresarial, como de preocupación en la opinión pública.
- La respuesta del presidente López Obrador fue que no se cedería ante los chantajes de parte de grandes productores y “coyotes”, que no representan a los pequeños y medianos campesinos, y que los subsidios otorgados en el caso del trigo no se habían reflejado en la baja de los productos finales como el pan. También rechazó la propuesta del gobernador de Sinaloa, de ir a tomar instalaciones de las grandes empresas agrícolas.
- La toma del aeropuerto concluyó por la mañana del 15 de junio, con el acuerdo de realizar ese mismo día una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya, donde se

alcanzaron los siguientes acuerdos: establecer “un precio razonable para las toneladas que no lograron entrar en el esquema; los productores han hablado de 4 millones y para eso tiene que haber tres voluntades: una, la de los agricultores, que ya están de acuerdo en que estarían dispuestos a bajar el precio de garantía; dos, la del gobierno, que podría aportar recursos de manera adicional, y la de los grandes compradores, para que realmente contribuyan a que mejore el precio”. También se acordó establecer una mesa de trabajo con Segalmex para revisar los detalles técnicos que pudieran surgir en el programa de comercialización, y comenzar a pagar el maíz que ya se acopió en las bodegas para incentivar a los grandes industriales a que inicien sus compras al reducirse la oferta de cosechas.

- El líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía, calificó de positiva la reunión con el Ejecutivo estatal, pues se consiguieron “importantes avances” en la lucha por obtener un precio justo del grano (en principio se conoció en fuentes abiertas que el gobierno comprará 500 mil toneladas adicionales con precios de garantía), además de reconocer que la problemática tiene su origen en reglas de comercialización internacional, pero que “en el futuro vamos a tener que cambiar como es depender de los precios de la Bolsa de Chicago”.

Prospectiva del tema

Ante las presiones de los productores de maíz y trigo de Sinaloa, los gobiernos federal y estatal lograron desarticular los riesgos de las tomas a Pemex y al aeropuerto, aunque no quedaron aún establecidos los detalles del costo que tendrá la incorporación de más toneladas al esquema de precios de garantía. Las movilizaciones siguen siendo efectivas para lograr respuestas del gobierno, especialmente en esquemas de subsidios que son ampliamente discrecionales como el caso de los granos básicos que compra Segalmex. Cabe señalar, que los productores de Sinaloa representan uno de los sectores más productivos, rentables y con mayor capacidad de negociación del campo mexicano, su movilización representó un nivel de desafío mayor que en el resto de las entidades federativas. Aun cuando estas protestas han sido recurrentes en años anteriores, pueden tornarse nuevamente en un foco de tensión con alcances nacionales, si se rompen los acuerdos de pago y apoyos establecidos para las próximas semanas. Será especialmente riesgoso para el próximo ciclo agrícola ya que coincidirá con las fechas de la elección presidencial.



Aumenta la percepción de inseguridad en Tijuana ante las amenazas del crimen organizado contra alcaldesa, gobernadora y exgobernador

VIOLENCIA CRIMINAL

El pasado 12 de junio la policía municipal de Tijuana, Baja California, encontró una camioneta pick up abandonada en una gasolinera, en cuyo interior había siete cadáveres que aún no

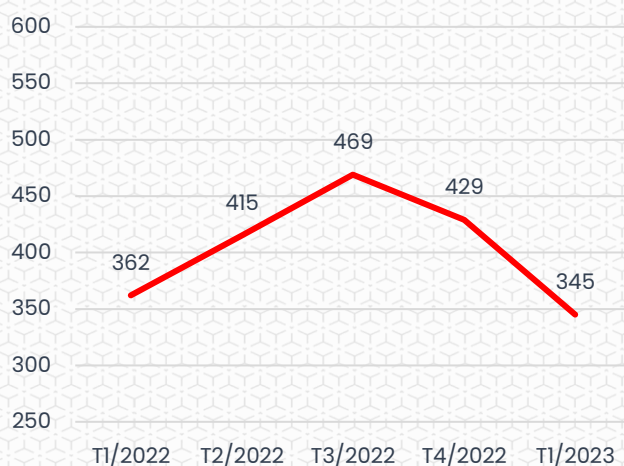
han sido identificados. El fiscal General de Baja California, Ricardo Iván Carpio informó que los sospechosos que habían sido detenidos por estos hechos, fueron liberados al no encontrarse elementos para incriminarlos. Este incidente ocurrió en un contexto de tensión en el municipio más violento del país por los siguientes hechos:

- El 17 de mayo pasado hubo un atentado en contra de la vida de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, en el que uno de sus escoltas resultó herido. Desde este incidente, la alcaldesa decidió mudar su residencia al cuartel de la demarcación a sugerencia de la Guardia Nacional. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, en su conferencia matutina del 13 de junio, que había amenazas por parte de grupos del crimen organizado contra la alcaldesa, de la gobernadora Marina del Pilar y del senador Jaime Bonilla (exgobernador de la entidad); por ello, señaló, se les está brindando protección especial. También es importante destacar la jornada violenta del sábado 17 de junio, en la que se registraron múltiples incidentes (tres muertos y dos heridos por heridas de bala) en distintos puntos del municipio.

Estos hechos de violencia en Tijuana y las amenazas en contra de tres de las autoridades más importantes del estado tienen como una de sus razones la disputa entre distintas organizaciones criminales por controlar el territorio (estratégico para el trasiego de armas y sustancias prohibidas). En este municipio hay registro de presencia de 14 organizaciones diferentes, de las cuales las más importantes son los dos cárteles presentes a nivel nacional (Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación) y sus respectivas coaliciones, que también presentan conflictos internos y con bandas independientes. Actualmente destaca el conflicto entre Los Guzmán y Los Zambada (ambas células del Cártel de Sinaloa) que, a su vez, involucra a grupos regionales subordinados y aliados que participan de los enfrentamientos.

La disputa entre estos grupos podría ser la razón de las amenazas contra las autoridades, puesto que existe la posibilidad de que la intención sea cooptarlas, o evitar que el grupo contrario lo haga. Mientras tanto, además del incremento de la violencia en los últimos días y de la sensación de miedo e incertidumbre presente en los habitantes del municipio, el resguardo de la alcaldesa en un cuartel podría agravar esta percepción, especialmente entre los propios elementos de la policía municipal. La propia alcaldesa trató de minimizar estos hechos, después de que miembros

Víctimas letales del crimen organizado en Tijuana



*Fuente: Lantia Intelligence, 2023.

del partido de oposición, el Partido Acción Nacional, la acusaran de haberse escondido por miedo y no atender sus responsabilidades. Al respecto Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California señaló que esa acción daba un mal mensaje para la ciudadanía, pues “si la primera autoridad, la que debe encabezar los esfuerzos por la seguridad, se va a vivir a un cuartel (...) qué podemos esperar los dos millones de habitantes de esta ciudad”.

En el corto plazo se puede esperar la continuación de la violencia en el municipio y las amenazas en contra de las autoridades como resultado de las disputas entre grupos criminales. Este momento de crisis exigirá la atención de las autoridades y la focalización de la estrategia de seguridad en Tijuana que, hasta el trimestre pasado, registró una disminución importante en el número de víctimas letales del crimen organizado. Seguramente la percepción de inseguridad entre la población registrará un incremento considerable.